

II. Actividad de los sujetos procesales.

A Modificaciones relevantes en la competencia de los tribunales.

2. Competencia funcional.

Parecería pueril que nos ocupemos de identificar cómo se encuentra distribuida la competencia funcional dentro del proceso penal, pero esto resulta necesario en orden a reconocer, en este primer momento solo de forma descriptiva, cuales son las competencias o facultades que acompañan al Juez de Paz, conforme a la estructura del proceso y cuál es su ubicación dentro del mapa procesal que determina el Código. También se hace necesario porque a partir de eso contamos con una excusa para hacer evidentes, más adelante, las razones de algunas disfuncionalidades del procedimiento penal común diseñado por el Código Procesal Penal de 1997, y las particulares modificaciones que ha realizado el nuevo Código Procesal Penal.

Un repaso del Código Procesal Penal de 1997, e incluso por el Código de reciente aprobación, es suficiente para demostrarnos que la opción político criminal que se asumió en nuestro país, fue la de un proceso penal que sin renunciar a instituciones procesales de corte inquisitivo, recogiera otras que resultan propias de un sistema procesal acusatorio. Pero también se optó porque en la combinación de unas y otras, se mostraran con más acento las instituciones y principios del sistema acusatorio. Esa selección y agrupación de instituciones y principios procesales de sistemas dispares, en un solo sistema, ha dado lugar a la conformación de un híbrido³⁴ denominado por la doctrina procesal como proceso o sistema procesal penal mixto.³⁵

34. QUIÑONES VARGAS, Héctor. Las Técnicas de Litigación Oral en el Proceso Penal Salvadoreño. DPK Consulting. San Salvador, 2003. pag. 38. este autor reconoce que "el sistema procesal penal de El Salvador no es inquisitivo, pero tampoco es acusatorio adversativo. Es, a mi modo de ver, un híbrido de ambos; encausado y administrado de forma oral."
35. B.J. MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal argentino, Tomo II. Edit. Hammurabi S.R.L., Buenos Aires, 1989. pag. 214. este autor al referirse a la reforma del sistema inquisitivo indica que: "...la solución que se impuso fue, en realidad, un compromiso: siguieron rigiendo ciertas reglas de la Inquisición, en especial, los principios mencionados, e hicieron irrupción otros, provenientes del regreso a las formas acusatorias, que condicionaron la significación de aquellos. De ahí el nombre con el que aquí se conoce el nuevo sistema: *mixto*..."

Lo anterior constituye una premisa necesaria para entender por qué dentro de la estructura del proceso penal encontramos una cantidad importante de fases y aunque el legislador ha procurado que los principios acusatorios brillen en todo el proceso, unas fases del mismo responden más bien a las características que identifican a un sistema inquisitivo, pero hay otras en las que el sistema acusatorio irradia sus principios con mayor claridad.

Velez Mariconde³⁶ identifica, dentro de las fases del proceso que en su momento reguló la legislación argentina, las siguientes:

a) Procedimiento preliminar eventual. Por tratarse de una actividad casi estrictamente policial, se reconoce en ella un carácter preprocesal. Se trata de actos de investigación orientados a lograr la fundamentación de la imputación inicial.

b) La Instrucción formal. Realizada por un órgano jurisdiccional con el propósito de obtener los fundamentos necesarios para sustentar una acusación o determinar el sobreseimiento.

c) La Fase Crítica o intermedia. Que es el momento destinado a determinar si la instrucción ha permitido dar base a una acusación o por el contrario debe pronunciarse el sobreseimiento.

d) El juicio Plenario. Es la etapa esencial del proceso penal y entre otras cosas comprende la recepción de prueba y la decisión judicial definitiva.

e) Unas fases eventuales, como el trámite del recurso de casación y

f) La Ejecución de la Sentencia penal.

Esas etapas del proceso, identificadas por el autor mencionado, pueden reducirse a los tres momentos o fases que establece el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica y que son las siguientes: El procedimiento preparatorio o instrucción preliminar, el procedimiento intermedio y el procedimiento principal o juicio.³⁷

Esa estructura básica ha sido retomada para el Procesal Penal salvadoreño, tanto en el Código de 1997, como en el aprobado en el año próximo pasado, pero adaptada a la configuración del Órgano Judicial

36. VELEZ MARICONDE, Alfredo. Derecho Procesal Penal Tomo II. Marcos Lerner Editora Córdoba SRL, Córdoba, Argentina, 1986. pág. 129.

37. Tomado de la Exposición de motivos del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, incluido como apéndice en la obra de Julio Maier, ya citada.

que establece no solo la Ley Orgánica Judicial, sino la propia Constitución. Dentro de la organización y funcionamiento del Órgano Judicial se insertan a los Juzgados de Paz, que se encuentran diseminados por todo el territorio nacional. Es este el único órgano jurisdiccional que tiene presencia en todos y cada uno de los municipios del país (Art. 175 Cn y 22 LOJ). Esa proximidad del Juez de Paz a la población, de la que carecen otros juzgados, entre ellos los de Instrucción, habría determinado la asignación a ese funcionario, de algunas facultades dentro del desarrollo del proceso penal. En todo caso, simplemente se mantuvo unas competencias que el juez de paz ya ostentaba desde la vigencia del Código Procesal Penal de 1974, recogidas también en el art. 64 de la Ley Orgánica Judicial: El juzgamiento de las faltas y el conocimiento de “las primeras diligencias de la Instrucción”; y se habría ampliado su facultades decisorias en el ejercicio de ese control de las primeras diligencias de instrucción.

Pero, el juez de paz, en aquel momento histórico del proceso penal salvadoreño marcado por la vigencia del Código Procesal Penal de 1974, no decidía si procedía o no la instrucción; una vez instado el órgano jurisdiccional, a partir de cualquiera de los actos pertinentes para ello (denuncia, aviso o acusación), la fase de instrucción tenía origen y no concluía sino hasta después de agotada la investigación, lo cual debía ocurrir en un plazo de noventa días, ampliables hasta ciento veinte días, en el caso del juicio ordinario (Art. 123 CPP) y en un plazo máximo de cuarenta y cinco días para el juicio sumario (Art. 395 CPP). Por supuesto que el Juez de Paz tenía facultades para calificar la denuncia y la acusación, pero el resultado de esa labor solo podía ser la inadmisibilidad de cualquiera de esos dos actos iniciales de la instrucción, nunca el sobreseimiento, decisión que solo resultaba oportuna al cabo de la instrucción; es decir, la calificación inicial que hacía el juez, no provocaba la imposibilidad de iniciar la instrucción ex –oficio, o cuando menos de iniciarla a partir del replanteamiento de la denuncia o acusación, satisfaciendo en cualquiera de ellas las exigencias legales.

Sin embargo, con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal aprobado en 1997, y como efecto de la ampliación de las facultades del Juez de Paz, éste no siempre ha de llevar el proceso al juez de instrucción para que la investigación continúe, al margen de que sea con el procesamiento o no de alguna persona, con la sujeción o no del

imputado al proceso a través de la aplicación de alguna medida cautelar; el Juez de Paz se encuentra con poder suficiente para truncar el proceso en ese momento tan precario, ordenando sobreseimientos, sean provisionales o definitivos, o para permitir la progresión de ese proceso, habilitando la instrucción. Esas facultades, y otras con similares efectos, se encuentran recogidas en el art. 256 CPP hasta ahora vigente.

Pero, eso está influido, insistimos, por la adaptación de aquella estructura básica, esencial del proceso penal a la realidad nacional. Era necesario incorporar dentro de esa estructura procesal, algunas competencias para el Juez de Paz, quien como ya lo mencionamos, es el órgano jurisdiccional más próximo a la comunidad. Por ello se diseñó, como lo veremos, una fase particular en la que la actuación del Juez de Paz resulta determinante.

Para ocuparnos, entonces, ya directamente de lo que es materia de este apartado, es necesario recurrir a la afirmación de algún autor local³⁸, para reconocer con él, cinco fases dentro de la estructura de nuestro proceso penal, a saber:

a) Fase Inicial: Que comprendería desde la recepción de cualquiera de los actos iniciales (Denuncia, Querella, Aviso) hasta la resolución que emite el Juez de Paz, al margen de que esta se pronuncie en audiencia inicial o “con vista del requerimiento fiscal”. Art. 255 CPP. Vigente y Art. 297 CPP aprobado. Es el Juez de Paz el funcionario competente para conocer de esta etapa del proceso (Art. 55 CPP vigente y 56.b CPP aprobado) y para algunos tiene como propósito “la fundamentación del requerimiento fiscal, como medio de ejercicio de la acción”; pero es evidente que, a juzgar por las facultades que en esta etapa del proceso están confiadas al Juez de Paz, el propósito trasciende a ese solo motivo, pues a pesar de constituir nada más que un momento inicial, se trata de una fase determinante en el proceso penal.

b) La Fase de Instrucción: en este momento del proceso, el fiscal tiene la oportunidad, bajo control y guía del Juez de Instrucción, de ampliar los elementos de convicción que apresuradamente obtuvo durante las diligencias iniciales de investigación. Durante esta fase se ha de recoger todos aquellos elementos que sirvan al fiscal para fundamentar

38. QUINTANILLA, Lisandro H. Et al. Derecho Procesal Penal Salvadoreño. CSJ-AECI, San Salvador, 2000. pág. 281.

la acusación y al imputado y su defensor, preparar la defensa. Art. 265 CPP vigente y Art. 301 CPP aprobado. La competencia funcional para el conocimiento de esta etapa, pues, sigue estando confiada al Juez de Instrucción.

d) La Fase del Juicio: es la etapa central del proceso, confiado al Tribunal de Sentencia, quien ha de decidir si la prueba que ante ellos ha sido producida, fue capaz o no de enervar la presunción de inocencia que durante todo el proceso acompañó al acusado. Este Tribunal comprende dentro de su competencia, pues, pronunciar la sentencia de condena o de absolución.

e) Fase de Impugnación y de Ejecución de la Sentencia: Según lo preceptuado por el Código Procesal Penal de 1997, la Sentencia es impugnabile exclusivamente a través del recurso de casación, cuya competencia reside en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el Código Procesal Penal aprobado instaura nuevamente la segunda instancia, con lo cual la sentencia definitiva puede ser impugnada a través del recurso de apelación ante las Cámaras de Segunda Instancia. Una vez firme la sentencia, el control de su ejecución compete al Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena.

La inclusión de una fase inicial, encomendada funcionalmente al juez de paz, que cuando se trata de imputado detenido coincide en sus plazos con los tiempos previstos por el art. 13 Cn, para la detención para inquirir, pero que no tiene como propósito simplemente resolver acerca de la libertad o la detención provisional del imputado y, por tanto, que no coincide en sus propósitos con los fijados por el precepto constitucional para esta forma de privación de libertad, constituye una de las razones que dan origen a una serie de problemas procesales.

Según el Art. 13 Cn, el término de la detención para inquirir está previsto para que dentro del mismo, el “tribunal correspondiente”, en la actualidad únicamente el Juez de Paz, cumpla con las obligaciones de notificar al detenido en persona el motivo de su detención, recibir su declaración indagatoria y decretar la detención provisional o la libertad de esa persona; pero nada más. No obstante, el Código Procesal Penal, tanto el vigente como el de reciente aprobación, al determinar las competencias funcionales del Juez de Paz, propias de esa fase

inicial, amplía las previsiones constitucionales, otorgando facultades para pronunciar una serie de decisiones dentro de las cuales hay unas que pueden provocar la conclusión o cuando menos la suspensión del proceso penal, evitando con ello la instrucción.

2.1. Otras particularidades sobre la competencia Funcional

a) Cámaras de Segunda Instancia.

La lectura del art. 51 CPP aprobado, resulta insuficiente para reconocer la ampliación de las competencias funcionales de las Cámaras de Segunda Instancia. Aparentemente su competencias se han mantenido inalteradas; sin embargo, cuando se revisa la regulación particular de los recursos, especialmente el capítulo II del título III del libro cuarto, en el que se regula la apelación contra las sentencias definitivas dictadas en primera instancia, empezamos a comprender cuán profundas han sido las modificaciones que en esta materia ha provocado el Código Procesal Penal aprobado, pues se edifica nuevamente una segunda instancia, como garantía del justiciable, a fin de que un tribunal superior revise el fallo emitido.

b) Tribunales de Sentencia. Configuración del Tribunal Sentenciador.

El Tribunal de Sentencia, ve modificada su integración, pues la regla general ha de ser que se conozca de los delitos de manera unipersonal. Se elimina la regla de exclusión para la determinación de cómo ha de integrarse el Tribunal sentenciador, y se determina de forma concreta el catálogo de delitos que han de formar parte de las competencias del Tribunal del Jurado, y del Tribunal de Sentencia en pleno, el resto corresponderá conocer a un solo juez del Tribunal de Sentencia.

El art. 53 CPP aprobado, parece reducir las competencias del Tribunal de Sentencia como colegio de jueces; pero, la letra “b” de esa misma disposición, permitiría ampliar esas competencias, por cuanto cualquier delito podría de alguna manera presentar las características de uno de “realización o investigación compleja”. Este es un concepto cuya precisión encontramos, no en las regulaciones sobre las competencias del Tribunal de Sentencia, sino más bien en el art.310 CPP, aprobado, que se refiere a la prórroga del plazo. Se ha entendido como delito de

realización o investigación compleja, aquel que presenta multiplicidad de hechos relacionados o un elevado número de personas en las que recae la condición de imputados o de víctimas. Estas características no son propias de algún delito en particular, sino que pueden ser comunes, sino a todos, cuando menos a una cantidad importante de comportamientos tipificados como delitos por el Código Penal.

c) Juzgados de Instrucción. Modificaciones en la revisión de la medida cautelar dictada por el Juez de Paz.

El Código Procesal Penal vigente, concede al Juez de Instrucción, la facultad de realizar una especie de revisión de las medidas cautelares adoptadas por los jueces de paz. El art. 266.1 CPP vigente indica que el contenido del auto de instrucción comprende, entre otras cosas, la ratificación de las medidas cautelares patrimoniales y no patrimoniales impuestas, su modificación o la libertad del imputado. Es decir, el juez de instrucción al solo recibo del expediente proveniente del Juzgado de Paz, puede revisar las medidas cautelares, facultad que ahora no encontramos comprendida dentro del art. 302 CPP aprobado.

Lo dicho no significa, por supuesto, que se haya suprimido la facultad de realizar la revisión de medidas cautelares; la propia naturaleza de estas medidas y su sujeción a la regla del *Rebus Sic Stantibus*, nos hace entender que las mismas pueden sufrir variaciones, si las condiciones que las motivaron han tenido igualmente alguna modificación. Lo que sí vale la pena destacar, es que esta revisión de medidas no puede hacerse de manera oficiosa por parte del Juez instructor, sino que se encuentra vinculada a la instancia de cualquiera de las partes. Así lo prevé el art. 343 CPP aprobado.

También es destacable que el párrafo tercero del art.361 CPP, ha tratado de establecer una regulación que permite superar la disfuncionalidad que provocaba la imposibilidad de realizar la audiencia preliminar en ausencia del imputado, especialmente en aquellos casos de negativa del detenido, de salir del centro penal para asistir a la audiencia. Ahora el juez de instrucción podrá, si así lo estima pertinente, celebrar la audiencia aún sin la asistencia del imputado.

d) Juzgados de Paz. Resoluciones que puede adoptar en la Audiencia Inicial. Juicios por Falta. Juicios Sumarios.

Quizá sean las competencias asignadas al juez de paz, las que han sufrido unas variaciones más importantes, porque aún cuando algunos destacarían la imposibilidad de dictar sobreseimientos provisionales durante la audiencia inicial, como una reducción en la facultades otorgadas a este órgano jurisdiccional, lo cierto es que al diseñarse el procedimiento sumario y confiar su desarrollo pleno al juez de paz, sus responsabilidades se han visto claramente extendidas.

La supresión del sobreseimiento como una posible resolución de la audiencia inicial, obedece a la propia naturaleza de ese acto decisorio, pues constituye una forma de conclusión de la investigación y del proceso, pero no de una investigación tan precaria como la que se lleva a cabo con las diligencias iniciales, sino más amplia y en la que se hayan realizado todos los actos de investigación que razonablemente ofrecía el caso.

Por otro lado, como ya hemos tenido oportunidad de anunciarlo en palabras anteriores y como lo argumentaremos con más esfuerzo más adelante, la instrucción ahora no depende de un acto decisorio del juez de paz; la instrucción en el diseño legislativo del proceso penal común, constituye una etapa necesaria; siempre ha de haber una instrucción cuando no haya sido posible resolver en audiencia inicial a través de una forma alternativa y luego de pronunciarse sobre la posibilidad o no de decretar alguna medida cautelar, el juez de paz solo tiene que ordenar la remisión del proceso al juez de instrucción.

Podría cuestionarse el propósito de una audiencia inicial convocada, cuando el fiscal no ha requerido más que la instrucción, prescindiendo completamente de cualquier medida cautelar; pero, es que aún cuando el tema esencial de la audiencia podría llegar a ser la discusión en torno a las medidas cautelares, no es el único debate que puede provocarse, en tanto que pueden surgir otras alternativas resolutorias que bien han de merecer una discusión. Aunque el fiscal haya pedido instrucción prescindiendo de medidas cautelares, nada obsta para que pueda buscarse la solución del conflicto penal por la vía de la conciliación, de la suspensión condicional del procedimiento, de la revocatoria de la instancia particular, etc. Esto hace evidente, que la audiencia inicial convocada aunque no vaya a discutirse aplicación de medidas cautelares, bien merece la pena.

2.2. Competencia territorial

a) Por distrito. Presupuesto de excepción a la competencia del juez del lugar del hecho. Justificación.

La regla general en materia de competencia territorial es que conozca el juez del lugar donde se ha cometido el delito (*locus delicti commise*), cosa que así regula el art. 57 CPP aprobado. Pero esa misma disposición nos permite romper esa regla de manera excepcional, cuando el delito aparezca con las características comisivas del crimen organizado, pero además haya sido cometido con anterioridad a la vigencia de la ley especial; en tal caso, la competencia para juzgar tales hechos ha de recaer sobre los juzgados de la cabecera del Distrito Judicial correspondiente.

Las razones para apartar del conocimiento de estas causas a los jueces de la localidad donde ocurrió el hecho, están vinculadas esencialmente con la seguridad de esos jueces, así como de las demás personas intervinientes como testigos, víctimas u otra calidad.

b) Conflictos de competencia. Oportunidad procesal para declarar la incompetencia territorial y para interponerla como excepción.

Frente a la incompetencia por razón del territorio que declaraban los jueces de paz antes de celebrar la audiencia inicial, la Corte Suprema de Justicia, de manera reiterada se pronunció diciendo que “el Juez de Paz que reconozca su incompetencia por razón del territorio no podrá declararla, debiendo realizar la audiencia inicial y luego remitir las actuaciones al Juez de Instrucción competente.” (Resolución pronunciada en el expediente de conflicto de competencia número CFP 39-2000, de fecha 1 de febrero de 2001). Esta decisión del Tribunal Supremo, estaba sustentada en razones determinadas por la improrrogabilidad de los términos (del término de inquirir en particular), así como en el principio de celeridad y en el derecho fundamental del imputado a ser juzgado en un plazo razonable y obtener certeza sobre su situación jurídico-procesal.

Tomando en cuenta la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ahora, el párrafo final del art. 312 CPP establece como oportunidad procesal para plantear la excepción dilatoria de incompetencia por el territorio, hasta después del auto de instrucción. Y en armonía con eso, el párrafo primero del art. 64 CPP, aprobado, ha indicado que el juez que reconozca su incompetencia por territorio solo podrá así declararlo a partir de la instrucción formal. Ambas disposiciones legales sugieren, entonces, que tal incompetencia territorial no puede ser declarada por jueces de paz en audiencia inicial y ni siquiera en la calificación

preliminar del requerimiento fiscal. Esto significa que aún cuando el juez de paz resulte incompetente, habrá de celebrar la audiencia inicial y hasta después remitirá el expediente al juez de instrucción que sea competente; tal como lo vino indicando la Corte Suprema de Justicia.

Esto tiene a su base, el grave perjuicio que se le ocasionaría a los justiciables, si el juez de paz se declarara incompetente, generando una reducción, si es que no el vencimiento, del término para inquirir, sin que se haya emitido una decisión sobre las pretensiones de las partes y sin que se haya resuelto la situación jurídico procesal del imputado.

c) Prórroga de la competencia territorial y funcional en la Vista Pública.

Aún cuando la improrrogabilidad de la competencia constituye la regla general, vemos cómo el art. 64 CPP aprobado, contiene unas verdaderas reglas de prórroga de la competencia territorial y funcional, durante la vista pública. Así, el párrafo segundo de la disposición citada dice que la incompetencia por territorio no podrá ser alegada durante la vista pública, ni modificada de oficio cuando ya haya sido iniciada tal vista pública. Esto es, aún cuando el tribunal sentenciador, sea cual fuere la forma en que se encuentre integrado, sea territorialmente incompetente, habrá de celebrar la vista pública.

Lo mismo ocurre con relación a las faltas, cuyo juzgamiento está confiado a los jueces de paz; pero al advertirse en la vista pública que el hecho era constitutivo de una falta y no de un delito, el tribunal habrá de celebrar y concluir la vista pública; no podrá declararse incompetente. Esto también constituye una especie de prórroga de la competencia más que funcional, objetiva o material.

2.3. Impedimentos y recusaciones.

a) Ausencia de control por otro tribunal respecto de los motivos de excusa o recusación reconocidos por un juez de paz en audiencia inicial. Justificación.

El trámite ordinario, por llamarlo de alguna manera, previsto para las excusas o las recusaciones involucra el control de las razones aducidas para declarar la excusa o para interponer la recusación, por parte de un juez o tribunal distinto del que se ha declarado impedido o que ha sido recusado; sin embargo, en el caso de una excusa declarada por juez de

paz o una recusación admitida por este mismo órgano jurisdiccional durante la audiencia inicial, no han de ser sometidas a ese control; en vez de remitir las actuaciones al Juzgado de Instrucción, las ha de remitir de inmediato al juez de paz siguiente en número o al más próximo, para que asuma el conocimiento de la causa.

Esto se encuentra justificado por razones similares a la imposibilidad de declarar la incompetencia por el territorio durante la audiencia inicial. Seguir el trámite normal para las excusas o las recusaciones, podría traer aparejado el riesgo de que se venza el término de inquirir, sin que se haya resuelto la situación jurídica procesal del imputado.

Se plantea el problema de qué ha de entenderse por juez más próximo, en aquellos lugares donde solo existe un juzgado de paz. Obviamente en estos supuestos habrá de reconocer como más próximo, al juez del municipio más cercano.

2.4. Imputado

2.4.1. Determinación de la calidad de imputado. Originada por cualquier acto del procedimiento y no por un acto decisorio formal.

Determinar el contenido y significado del concepto “imputado”, y cuál sea el momento a partir del cual se asume tal condición, está lejos de ser un tema que tenga respuestas obvias y que por ello sea irrelevante o innecesario, como algunos supondrán.

Qué posición asumamos con relación a los alcances del contenido de ese concepto puede conducirnos a anticipar o a demorar el ejercicio de los derechos que acompañan a quien tiene esa condición procesal. Es decir, determinar quién es imputado y cuando tiene origen esa calidad, tendrá como consecuencia, a su vez, la determinación de cómo y a partir de cuándo, esa persona podrá acudir a las normas que configuran el estatuto del imputado y que comprenden, por supuesto, el catálogo de derechos y garantías procesales que le permitirían enfrentar la investigación y el proceso, de manera eficaz.